



UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER



Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo



CICLO DE DIÁLOGOS EN LA INDDHH

Derechos humanos
en tiempos de pandemia



Relatoría del cuarto encuentro
Empresas y Derechos Humanos
28 de abril de 2021

Relatoría del cuarto encuentro
del ciclo “Diálogos en la INDDHH”:
Empresas y Derechos
Humanos

28 de abril de 2021

EQUIPO COORDINADOR DEL DIÁLOGO

POR INDDHH

Wilder Tayler - Presidente
Magdalena Gutiérrez - Área de Estudios
Jorge Surraco - Área de Comunicación
Natalia Castagnet - Área Denuncias e
Investigación

POR ACNUDH

Jan Jarab - Representante para América del Sur
Graciela Dede - Asesora en DDHH de la
Coordinadora Residente Naciones Unidas Uruguay
Jimena Acosta - Consultora
Inés Invernizzi - Consultora
Fernanda Murias - Consultora
Ana Agorio - Diseño

RELATORÍA

Jimena Acosta
Inés Invernizzi

TABLA DE CONTENIDOS

- 1. Antecedentes (5)**
- 2. Dinámica del Diálogo (8)**
- 3. Empresas y Derechos Humanos (11)**
 - 3.1. Perspectiva histórica**
 - 3.2. DDHH y empresas en tiempos de pandemia**
 - 3.3. Iniciativas globales sobre empresas y DDHH y su implementación en Uruguay**
 - Proyecto de tratado internacional sobre las empresas transnacionales y DDHH
 - Comisión Interamericana de Derechos Humanos
 - Declaración tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales y política social
 - El trabajo de la OCDE en materia de Empresas y Derechos Humanos a nivel regional y nacional
 - Pacto Global
 - Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras empresas
 - 3.4. Perspectiva del trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos a nivel nacional (36)**
 - La perspectiva de la sociedad civil y el movimiento sindical a nivel nacional
 - El rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
- 4. Cierre (48)**
- 5. Anexos (55)**
 - 5.1. Tabla de panelistas y participantes**
 - 5.2. Relatoría visual**

1. Antecedentes

1. ANTECEDENTES

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Naciones Unidas en Uruguay y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) desarrollaron un Ciclo de Diálogos “Derechos humanos en tiempos de pandemia” para compartir buenas prácticas, visualizar brechas de respuesta y profundizar la necesaria articulación entre diversos actores.

Esta relatoría da cuenta del cuarto Diálogo del mencionado ciclo. El mismo tuvo como temática central Empresas y Derechos Humanos.

El respeto de los derechos humanos es un elemento central de la conducta empresarial responsable, que cobra aún más relevancia en tiempos de emergencia sanitaria, donde las circunstancias han afectado fuertemente tanto a las empresas como a los y las trabajadores/as. Hoy más que nunca, las empresas juegan un rol primordial en materia de desarrollo y como motor de la economía y pueden ser actores clave en la promoción de los derechos. Sus actividades pueden tener impacto negativo sobre el goce los derechos humanos, por ejemplo, de las personas trabajadoras, mujeres, niños y niñas, personas trabajadoras migrantes, personas LGBTI, derechos medioambientales, defensores y defensoras de derechos humanos , entre otras.

Los objetivos de este diálogo estuvieron centrados en generar un ámbito de intercambio acerca del estado del arte con relación al trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos a nivel global, regional y nacional; conocer las iniciativas que se están desarrollando en los diferentes sectores para la implementación de los estándares internacionales sobre Empresas y Derechos Humanos, y compartir buenas prácticas y desafíos comunes. Asimismo, se orientó el espacio a identificar

oportunidades de sinergia entre las iniciativas globales, regionales y nacionales, así como los próximos pasos para continuar desarrollando la transversalización de la temática en las organizaciones y empresas del país.



Mensajes de María García, Soledad García Muñoz y Germán Zarama preparados para emitirse en vivo desde el control técnico.

2. Dinámica del diálogo

2. DINÁMICA DEL DIÁLOGO

Debido a la situación de emergencia sanitaria vigente en el país al momento del Diálogo, el mismo se desarrolló en un formato virtual.

El evento contó con un panel conformado por siete expositores, quienes contaron con seis minutos para exponer desde su perspectiva, sobre el avance global, regional y nacional en materia de empresas y derechos humanos. Los panelistas presentaron las diferentes iniciativas que se están desarrollando, aportando una perspectiva histórica y evolutiva del trabajo en la temática, tanto a nivel de organismos internacionales, del Estado, como de organizaciones de la sociedad civil. ⁽¹⁾



Invitadas e invitados durante la preparación previa del Diálogo

¹ - Ver listado de panelistas y participantes en Anexo 2.

Asimismo, se contó con nueve participantes, referentes de distintas organizaciones de la cooperación internacional, el Estado, y la sociedad civil, quienes expusieron sus avances e iniciativas sobre la temática. Los participantes contaron con tres minutos para exponer.

Al final del bloque de participantes, los panelistas volvieron a hacer uso de la palabra, recogiendo consultas que surgieron durante el Diálogo y dando cierre final a su exposición.

La apertura del evento estuvo a cargo de Wilder Tayler, presidente de la INDDHH y el Diálogo contó con la moderación de Graciela Dede, Asesora de Derechos Humanos de la Oficina de la Coordinadora Residente.

3. Empresas y Derechos Humanos

3. EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

3.1. PERSPECTIVA HISTÓRICA

El **Presidente de la INDDHH, Wilder Tayler**, inició su intervención reflexionando acerca de que, a fines del siglo pasado, era una novedad que la conducta de las empresas fuera vista como relevante para los derechos humanos. En este sentido, se esperaba que las empresas se interesaran proactivamente en asuntos de derechos humanos.

Manifestó que, si bien parte del debate conceptual sobre esta temática tuvo lugar en el ámbito internacional, también reflejaba las luchas y experiencias de los pueblos y de defensores y defensoras de derechos humanos. Mencionó episodios paradigmáticos vinculados a la temática y la discusión frecuente sobre el trabajo infantil.



Wilder Tayler, Presidente de la INDDHH, dando la bienvenida al encuentro.

Tayler brindó una visión histórica del tema empresas y derechos humanos, identificando las distintas iniciativas que se han desarrollado a nivel legal e institucional en los ámbitos internacionales, entre las que mencionó:

- La Declaración Tripartita sobre las Empresas Multinacionales del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre todo en derechos laborales, como el primer antecedente; ii) las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con recomendaciones no vinculantes para las empresas multinacionales, las cuales se enfocan en buenas prácticas de responsabilidad social empresarial e incluyen un mecanismo de implementación a través de los Puntos de Contacto nacionales (el cual se estableció en Uruguay en febrero 2021);
- La Subcomisión sobre Protección y Promoción de Derechos Humanos, que derivó a los actuales Consejos de DDHH, con la intención de avanzar en la definición de las responsabilidades de (todas) las empresas, e incorporar el concepto de obligatoriedad de esas responsabilidades, lo tuvo fuerte oposición de la comunidad de negocios y algunos países. Este trabajo derivó en la creación de la figura del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales, quien preparó los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos que hoy constituyen el marco normativo de referencia más usado.
- Finalmente, se refirió al Pacto Mundial, iniciativa de Naciones Unidas que convoca a las empresas e instituciones internacionales en torno a una serie de 10 principios sobre el medio ambiente, el combate a la corrupción, el trabajo y los derechos humanos y que también promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Planteó que estas iniciativas ayudaron a avanzar en la voluntariedad y obligatoriedad en cuanto a cómo las empresas se relacionan con la temática de los derechos humanos.

Destacó que estas iniciativas confluyen en la decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el año 2014, de elaborar un instrumento internacional vinculante (un tratado) sobre empresas y derechos humanos.

Finalizó con la reflexión en torno a la intensidad y los recursos volcados en este debate que confirman que las empresas constituyen efectivamente una forma de poder organizado que son relevantes para los derechos humanos, y que, la rendición de cuentas, así como el acceso a la justicia de las víctimas son los grandes temas por discutir.

"Las empresas constituyen efectivamente una forma de poder organizado que son relevantes para los derechos humanos, en este marco la rendición de cuentas, así como el acceso a la justicia de las víctimas son los grandes temas por discutir."

Wilder Tayler

Por último, mencionó que la INDDHH incluyó este tema en su plan estratégico 2019-2023, y refirió a algunas áreas de intervención: atención e investigación de denuncias, elaboración de informes temáticos, actividades educativas, coordinación de un Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Ambiente en la INDDHH, entre otras. Finalmente manifestó el apoyo de la INDDHH para avanzar hacia la construcción de un Tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos en el marco de Naciones Unidas.

3.2. DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Algunos participantes del Diálogo aludieron al impacto específico del COVID-19 en temas de empresas y derechos humanos.

El **Representante de ACNUDH para América del Sur, Jan Jarab**, inició su exposición haciendo referencia a los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace diez años y cómo los mismos recuerdan los derechos y obligaciones que emanan de los propios tratados de derechos humanos universales y regionales. Estos invocan al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, sin importar su tamaño, sector, ubicación; ya sean empresas pequeñas, medianas o grandes, en el país o en el extranjero, privadas o estatales. Estos tratados, agregó, recuerdan la importancia de la debida diligencia en derechos humanos y la rendición de cuentas, así como el acceso a mecanismos de reparación para las víctimas de daños a los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial.



Jan Jarab, Representante de ACNUDH para América del Sur, durante la apertura del panel.

Continuó su presentación, planteando que todo lo expuesto sigue siendo relevante en las condiciones de la actual pandemia, así como de la futura recuperación de la región. La pandemia ha tenido un impacto profundo en las empresas, particularmente las pequeñas y medianas, pero también ha demostrado la necesidad imperiosa de mejorar las

salvaguardas, especialmente para los trabajadores y trabajadoras, en particular de trabajadores del área de la salud y de servicios esenciales, para quienes trabajan en entornos cerrados por, ejemplo quienes trabajan en plantas empacadoras de carne y para los trabajadores y trabajadoras que ya tenían condiciones problemáticas antes de la pandemia con poca posibilidad de distanciamiento social o sin equipos de protección personal adecuados.

Agregó que los espacios de trabajo son lugares clave para prevenir los contagios, ya que se ha demostrado que son lugares donde se dan grandes brotes, y que hay una responsabilidad de las empresas y del Estado de proteger el derecho a la salud y la vida, sin por eso menoscabar los derechos laborales.

La pandemia mostró además el impacto particularmente dramático en personas que trabajan en el sector informal, aunque en Uruguay el porcentaje de trabajadores informales es representado por un porcentaje menor que en gran parte de los demás países de la región, afirmó. Continuó planteando que la precaria situación de trabajadores del sector informal requiere la atención del Estado y del sector empresarial, con el fin de reducir la informalidad y de mejorar la protección social para todos y todas. Asimismo, afirmó Jarab, en la recuperación post pandemia se debe cuidar que el lucro de las empresas y el crecimiento económico de la sociedad no se realice a cualquier costo social, ambiental o de derechos humanos. Este es, agregó, un mensaje común de toda la ONU, encabezada por el Secretario General; saliendo de la pandemia es necesario reconstruir, sin bajar la protección de derechos y el cuidado del ambiente, sino fortalecerlos. Reducir las desigualdades que se analizan en tiempos de pandemia en el contexto de recuperación económica. Planteó que la erradicación de la pobreza extrema representa una tarea ineludible de los Estados, en alianza con el sector privado.

Continuó su exposición planteando que, para abordar el tema de empresas y derechos humanos en el contexto de la pandemia, pero también más allá de este, Uruguay cuenta con ciertas ventajas comparativas, por ejemplo, el desarrollo de sus empresas públicas y el volumen de negocios que éstas realizan. Estas empresas, a través de sus prácticas pueden actuar siendo el ejemplo y marcar estándares tal como lo exigen los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos actuales, es decir, tener un liderazgo claro en la implementación de dichos Principios.

Finalizó planteando que Uruguay aún no ha desarrollado una estrategia nacional relativa a empresas y derechos humanos, y que no cuenta con un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos. En este

sentido, planteó que estas políticas públicas son la mejor herramienta que tienen a disposición los Estados para promover y proteger los derechos humanos en el contexto de actividades empresariales de manera exhaustiva, coherente y coordinada. Agregó que en la región Colombia se encuentra adoptando su segundo plan, y que este año Argentina, Perú, Ecuador y Brasil se encuentran trabajando en su primer plan. La Oficina de ACNUDH colabora con la formulación e implementación de estos planes nacionales, brindando además apoyo para la labor del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU.

El soporte que desde ACNUDH se brinda, de acuerdo con lo planteado por Jarab, incluye la organización de los foros anuales y regionales sobre empresas y derechos humanos y la colaboración con socios claves, tales como el Proyecto de Conducta Empresarial Responsable para América Latina y El Caribe (CERALC), implementado desde el año 2019 por esta oficina, la OIT y la OCDE, el cual es financiado por la Unión Europea. Asimismo, agregó, desde ACNUDH se apoya la preparación de planes nacionales y otras actividades en el ámbito de empresas y derechos humanos, promoviendo la participación efectiva mediante procesos de articulación que reúnan a múltiples partes, diversas organizaciones de la sociedad civil, empresas, sindicatos, gremios, academia y organizaciones internacionales, junto a instituciones de gobierno y el Estado.



Enfatizó al final de su exposición que nadie debe quedar afuera de estos espacios de articulación y que el presente Diálogo ofrece la oportunidad para avanzar hacia una mejor colaboración de todos los actores, gobierno y empresas incluidos, para la instalación en Uruguay de un enfoque basado en la debida diligencia en derechos humanos durante la crisis y sobre todo para una recuperación sostenible más equitativa y justa con las personas, el medio ambiente y con la sociedad.

Fernanda Aguirre, Responsable de Derechos Humanos del PIT CNT, afirmó que en el marco de la pandemia en el país se está incumpliendo la legislación que se logró construir por parte de muchos actores sociales, en especial en lo que refiere al rol de las empresas en garantizar el derecho a la vida. Argumentó que, en el marco de la pandemia, existen relevamientos realizados por el gobierno, a través del MTSS, donde se pone de manifiesto que más del 50 % de las empresas no respetan los protocolos establecidos para el cuidado y la preservación de la vida de los trabajadores. Esto es especialmente relevante, en tanto estos protocolos están orientados a proteger el derecho humano fundamental de las personas, que es el derecho a la vida. Agregó que los sindicatos del rubro frigorífico y de la pesca realizaron denuncias sobre incumplimientos de protocolos, y en estos rubros se constataron fallecimientos de trabajadores por COVID-19.



Fernanda Aguirre, Responsable de Derechos Humanos del PIT CNT.

Finalizó su exposición planteando la relevancia de generar garantías y mecanismos para el cumplimiento efectivo de los protocolos en defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras del sector público y

privado, y de la población toda. Hizo especial énfasis en el área educativa y en la salud, afirmando que en ambos sectores no se han generado las condiciones para el cuidado y la protección de los trabajadores, ya sea por falta de personas para cumplir con los protocolos, o por falta de implementos de seguridad, lo que, destacó, sucede tanto a nivel público como privado.

Alejandra Scampini, Asesora Senior de Políticas de Poder Latam, organización que trabaja regionalmente en la rendición de cuentas y en buscar la transparencia en las empresas, señaló que lo nuevo es la pandemia, y destacó que en esta situación hay ganadores y perdedores, y entre los ganadores están empresas transnacionales vinculadas a la tecnología, pero también vinculadas a las vacunas que pueden salvar vidas.

Por lo tanto, para hablar hoy de Empresas y Derechos Humanos, planteó,



Alejandra Scampini, Asesora Senior de Políticas de Poder Latam

es necesario enmascararse en el debate desde una perspectiva de no hacer daño, no lucrar con la pandemia o no obligar a seguir trabajando. Se refirió al abuso corporativo, a considerar actividades esenciales sin tener en cuenta los principios rectores de DDHH, las recomendaciones de la OMS o expertos científicos.

3.3. INICIATIVAS GLOBALES SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS Y SU IMPLEMENTACIÓN EN URUGUAY

PROYECTO DE TRATADO INTERNACIONAL DEL GRUPO DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL DE COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y OTRAS EMPRESAS COMERCIALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS (OEIGWG)

Carlos López, Asesor Jurídico del Comisión Internacional de Juristas, aportó la mirada desde la sociedad civil internacional sobre el proceso de empresas y derechos humanos. Su exposición se centró en el proceso internacional, haciendo foco en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, adoptado en el año 2014 y en la resolución 26/9.⁽²⁾ En esta se crea un órgano intergubernamental de naturaleza abierta, en donde todos los Estados que así lo deseen pueden participar. Su duración es indeterminada hasta que llegue a cumplir con su tarea fundamental, cuyo objetivo es desarrollar un proyecto de “Tratado jurídicamente vinculante para regular, en las normas internacionales de derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales” (en adelante el Tratado). Este grupo celebra una sesión anual de trabajo intergubernamental la cual se lleva a cabo normalmente durante cinco días y del cual han participado un promedio de entre 80 a 90 estados.

De acuerdo con lo planteado por el panelista, los dos primeros años de este proceso han sido utilizados en un debate amplio y general sobre el Tratado⁽³⁾, sobre sus contenidos, alcance y campo de aplicación. Esto debido a que existió y aún persiste la discusión de si se debe aplicar a todas las empresas de negocios o solo a las empresas multinacionales.

² - Disponible en Internet: <https://www.ccoo.es/8f72c6f049f78e3171882d193b0b31b3000001.pdf>

³ - Segundo proyecto revisado sobre instrumento jurídicamente vinculante para regular, en las normas internacionales de derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/OEIGWG_Chair-Rapporteur_second_revised_draft_LBI_on_TNCs_and_OBEs_with_respect_to_Human_Rights.pdf

En la tercera sesión de este grupo se elaboró un primer borrador con una formulación general básica de los contenidos y la estructura, y en la cuarta sesión de trabajo que se logra un borrador completo como proyecto. Actualmente se está transitando la segunda revisión del proyecto y, según aseguró López, seguramente se esté desarrollando una tercera revisión para la séptima sesión del grupo de trabajo en setiembre.



Carlos López, Asesor Jurídico del Comisión Internacional de Juristas, Ginebra.

Continuó su exposición destacando la relevancia de conocer los objetivos del Tratado, enfatizando el interés común de Estados y empresas en el enfoque preventivo. En segundo lugar, planteó como objetivo la rendición de cuentas de las empresas, y en tercer lugar la cooperación internacional, con foco en el diálogo y cooperación entre empresas y Estados. Sobre esto último, agregó que no solamente se refiere a la cooperación en temas judiciales sino también, al intercambio de información económica y social, entre otras.

Este sería el primer tratado internacional vinculante en materia de Empresas y Derechos Humanos, según planteó López. Agregó, coincidiendo con lo planteado al inicio del Diálogo por Wilder Tayler, que existió un intento previo de realizar un tratado vinculante, que oficiara como Código de Conducta para las empresas, pero que no prosperó por temas de resistencia de algunos sectores, los cuáles aún continúan.

Continuó haciendo referencia a algunos artículos del Tratado, sobre los derechos de las víctimas y los recursos efectivos de los cuáles dispone una persona. Estos artículos, mencionó, ofrecen una serie de garantías

de los derechos de las personas en general, y de los defensores de derechos humanos en particular, de aquellos que utilizan los procedimientos judiciales para llevar a cabo una queja de los litigantes y representantes. Esto es un avance fundamental, debido a las muchas situaciones de persecución y hostigamiento a que los abogados y defensores se han visto sometidos en estos años.



El artículo 6° del Tratado, según plantea López, está fuertemente centrado en el tema de la debida diligencia, la cual deviene obligatoria en este proyecto de tratado. Esto obligaría a los Estados parte a hacer mandatoria la debida diligencia entre las empresas que se encuentran en sus territorios, lo cual seguramente será muy apreciado por muchas empresas multinacionales por gestionar un estándar global que permitirá competir en igualdad de condiciones a nivel internacional. Hasta el momento, en vista de que sólo algunos Estados han tomado medidas al respecto, hay una competencia desigual, afirmó.

Mencionó posteriormente que existen otros artículos del Tratado que hacen referencia a recursos y reparaciones, estableciendo principios generales y espaciales, a nivel civil y penal, aplicables a las empresas multinacionales, así como artículos sobre la cooperación jurídica internacional.

Finalizó su presentación, reiterando que existen entre 80 y 90 Estados que participan o se registran cada año, de los cuales un grupo menor participa activamente en las discusiones y elaboraciones. Agregó, que además de la organización que representa, existe un grupo mucho mayor de organizaciones de la sociedad civil, incluidos grandes

sindicatos internacionales regionales y nacionales, que también están presentes en cada sesión. Además, se encuentran las dos secciones principales de empresarios, la Cámara de Comercio Internacional y la Organización Internacional de Empleadores, las cuales están presentes cada año en el proyecto, realizando presentaciones. Agregó que en algunas oportunidades han participado asimismo Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y otras Organizaciones Internacionales han intervenido en los debates para dar su punto de vista, tales como la OIT.

Por su parte, la Dra. Marina Sande, Directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, en el inicio de su exposición planteó que Uruguay tiene una vasta trayectoria en materia de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional, tratando de un país que es reconocido dentro de la región y el mundo por su respeto a los derechos humanos y, sobre todo, por su compromiso con los tratados de derechos humanos y convenios de Ginebra mediante la ratificación.



Marina Sande, Directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario,
Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay

Se refirió al grupo de trabajo intergubernamental y al tratado que se encuentra trabajando. Coincidió con lo planteado anteriormente por el D. Carlos López, e indicó que se continúa discutiendo aun si el tratado de debe ser transnacional o debe abarcar además a pequeñas y medianas empresas y si debe incluir disposiciones acerca de la legislación interna de los Estados. Afirmó que no existe aún una posición a nivel de país por parte de Uruguay, cuyos representantes han tenido una posición

expectante e intervenido brevemente en los espacios de trabajo del mencionado Grupo.

Planteó también que para tener una posición a nivel país, es necesario tener previamente reuniones interinstitucionales, que ya habían comenzado en el pasado, pero a raíz de la pandemia se han suspendido. Es por ello que, según lo planteó la Dra. Sande se quiere impulsar un grupo de trabajo institucional interministerial, a los efectos de poder fijar una posición país sobre el tema que pueda llevarse al ámbito internacional, y tener una participación más activa en lo que refiere a la construcción de este instrumento internacional.

Agregó que en el ámbito internacional existen algunas reticencias al Tratado por entender que podría el texto del mismo solaparse o ser mal interpretado, tanto por la OIT, -en el entendido de que es el organismo regulador de todo lo relativo al trabajo desde una perspectiva de derechos humanos-, como por la OCDE por su trabajo en este tema.

Finalizó su participación, planteando que para poder continuar con la tradición del Uruguay de tener una participación activa en estos espacios de trabajo internacionales es necesario arribar a una posición consensuada, por lo que se está intentando renovar este trabajo con un grupo que pueda establecer los puntos focales a los efectos de tener una posición para llevar al exterior.

"Para continuar con la tradición del Uruguay, de tener una participación activa en el ámbito internacional, es necesario que tengamos una posición consensuada, por lo tanto estamos intentando renovar este trabajo con un grupo que puedan establecerse puntos focales a los efectos de tener una posición para poder llevar al exterior"

Marina Sande

Reconoció posteriormente la actividad relevante que la sociedad civil se encuentra desarrollando a este respecto, y entiende que es de suma importancia el trabajo en conjunto.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Soledad García Muñoz, Relatora Especial DESCA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compartió los avances en la temática que se han liderado desde dicha Comisión. En este sentido destacó un informe temático presentado en 2019, titulado “Empresas y

Derechos Humanos, Estándares Interamericanos”. Agregó que este informe fue elaborado en un proceso de dos años de duración, en el cual se recabó información de diversos actores, tanto de sociedad civil, instituciones públicas, empresas, academia, entre otros, que brindaron insumos en la materia. Estos junto con el análisis realizado por la Comisión de los Estándares interamericanos en la materia, tanto normativos y jurisprudenciales, buscan interamericanizar la temática. Afirmó que la óptica de Empresas y Derechos Humanos trasciende la responsabilidad social empresarial y conecta tanto con obligaciones de los Estados, lo cual queda claramente reflejado en el mencionado informe, así como las obligaciones de las empresas públicas y privadas.



Soledad García Muñoz, Relatora Especial DESCA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante su mensaje.

La Relatora agregó que este informe incluye un análisis de los contextos interamericanos de especial preocupación, como por ejemplo el relativo a justicia transicional, analizando cómo actores económicos generaron afectaciones graves a los derechos humanos en épocas de dictaduras o en épocas en que la paz en los Estados se ve interrumpida. Destacó el impacto que esto tiene en servicios públicos esenciales que se ven privatizados y la relevancia especial que esto adquiere en momentos de pandemia, con consecuencias atendibles desde una perspectiva de derechos humanos, como es el derecho a la salud, a la educación, el derecho humano al agua, entre otros.

El informe arroja luz sobre las principales afectaciones a los derechos humanos en relación con actividades empresariales en relación con colectivos en especial situación de vulnerabilidad: mujeres, infancia, LGBTIQ+, personas privadas de libertad, migrantes, afrodescendientes, población indígena, entre otros, según afirmó la Relatora. Agregó que el

informe permite identificar los criterios fundamentales interamericanos en esta materia y se presenta en un diálogo constante con el sistema universal y el sistema ONU, los Principios Rectores y con el tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos.

Finalizó su intervención llamando al sector público y privado a jugar un rol fundamental, tanto para la vigencia de los derechos humanos como para la recuperación económica, que, en tiempos de pandemia, es necesario realizar con un enfoque de derechos humanos bien entendido por todas las instituciones y las personas que conforman la sociedad.

DECLARACIÓN TRIPARTITA DE LA OIT SOBRE EMPRESAS MULTINACIONALES Y POLÍTICA SOCIAL

Nicolás Torres, Coordinador Nacional del Proyecto CERALC, comenzó su presentación afirmando que los derechos laborales son también derechos humanos. Es a partir de esta premisa que se realiza la vinculación entre OIT y el trabajo en empresas y derechos humanos.

Planteó que en el 1998 la OIT adoptó una declaración⁴ definiendo cuatro derechos fundamentales que son la libertad sindical, la negociación colectiva, la no discriminación en el empleo, la abolición del trabajo infantil y la abolición del trabajo forzoso. Para la OIT, estos cuatro derechos son derechos humanos en el ámbito laboral y todos los países están obligados, hayan o no ratificado los convenios sobre los cuáles estos derechos descasan.

De acuerdo con lo planteado por Torres, el instrumento que tiene la OIT sobre la temática de empresas y derechos humanos es la declaración tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales y la política social. La misma fue adoptada en el año 1977 y actualizada en el año 2017 para hacer eco de los Principios Rectores de las Naciones Unidas y las Líneas Directrices de la OCDE. La OIT, en este sentido, se enmarca en un esfuerzo global para abordar el tema de empresas y derechos humanos.

Prosiguió su exposición planteando que esta declaración sobre empresas multinacionales es el único instrumento tripartito, es decir que fue adoptado por gobiernos, empleadores y trabajadores. En él se establecen orientaciones directas a sindicatos, empleadores y empresas, independientemente de su tamaño, sobre temáticas de

⁴ Disponible en Internet: <https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang-es/index.htm>

empleo, formación, políticas públicas, relaciones industriales, conciliación de vida personal y trabajo y acceso a mecanismos de queja y reparación.



Nicolás Torres, Coordinador Nacional del Proyecto CERALC, OIT.

De acuerdo con lo planteado por Torres, lo más importante de esta declaración es su énfasis en la debida diligencia entendiendo por esta, el proceso continuo para la mitigación y reparación de los impactos que se pueden generar sobre el medio ambiente, los derechos humanos y sobre los derechos de los trabajadores, poniendo el énfasis en el diálogo social. Enfatizó por lo tanto la necesidad de que las empresas, los gobiernos, los trabajadores y los empleadores se comprometan a un diálogo social, que sea transfronterizo, local e incluso a nivel de empresas.

"... (existe) la necesidad de que las empresas, los gobiernos, los trabajadores y los empleadores, se comprometan a un diálogo social, que sea transfronterizo, local incluso a nivel de empresas. Un diálogo social habilitante para el ejercicio de todos los demás derechos fundamentales en el trabajo, pero además un diálogo social que permite justamente la implementación de la debida diligencia".

Nicolás Torres

Finalizó su exposición con un planteo sobre cómo el diálogo social es habilitante para el ejercicio de todos los demás derechos fundamentales en el trabajo y permite la implementación de la debida diligencia. Agregó que aquí la OIT hace un llamado a los sindicatos y a los empleadores a que, mediante el diálogo social, sean partícipes de la debida diligencia para proteger los derechos fundamentales en el trabajo.

La OIT se inserta de esta manera en la acción global, afirmó Torres, actualmente se encuentra trabajando con ACNUDH y con la OCDE para promover estos estándares de manera conjunta a través del proyecto CERALC.

EL TRABAJO DE LA OCDE EN MATERIA DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL

Germán Zamara, Punto Focal para América Latina y el Caribe de OCDE, participó del Diálogo a través de un video en el cual planteó la posición y avances que desde esta organización se están realizando en el tema, celebrando la generación del espacio para abordar la temática empresas y derechos humanos.



Germán Zamara, Punto Focal para América Latina y el Caribe de OCDE, en su participación del Diálogo a través de un video.

En este marco, planteó que desde la OCDE y otros organismos participantes del Diálogo se ha venido acompañando desde el proyecto CERALC la agenda regional de trabajo en el tema y también promoviéndola desde en Uruguay. Agregó que su organización mira con

mucho entusiasmo el hecho de que el país se haya adherido a las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

Continuó planteando que se trató de un proceso que llevó dos años y se realizó a partir de un trabajo muy articulado, especialmente con el Ministerio de Economía, pero también con otras partes interesadas, para buscar una apropiada adhesión, y que la misma estuviera acompañada por acciones y una hoja de ruta enfocada en promover esta agenda de conducta empresarial responsable.

Agregó que es muy importante hoy en día el contar con un Punto Nacional de Contacto de la OCDE a nivel de Estado, a quien se ha involucrado en distintas acciones y actividades a nivel regional, en el marco de la Red Regional de Puntos Nacionales de Contacto. Uruguay, afirmó, ha tenido una participación muy activa a nivel de intercambios, de diálogo, con miras a fortalecer la hoja de ruta del país en términos de promoción y de apropiación de los estándares de la OCDE.

Zamara destacó que es importante considerar que Líneas Directrices de la OCDE se actualizaron en el año 2011 a partir de la promulgación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, teniendo en cuenta además otros estándares clave como los de OIT en materia de empleo y relaciones laborales.

A partir de allí se comenzó a consolidar el marco de lo que hoy se conoce como los instrumentos internacionales sobre la conducta empresarial responsable, por lo que son instrumentos que se complementan entre sí y con los que se está tratando de promover una voz común, acompañando bajo un mismo estándar tanto a los gobiernos como a la sociedad civil, empresas, sindicatos, a la academia y a todas las partes que están tratando de impulsar esta agenda.

En el caso de Uruguay, agregó Zamara, se visualiza que existe un trabajo interesante por delante a nivel de buscar una coherencia desde la política pública, que acompañe todas estas iniciativas, pero que al mismo tiempo baje los mensajes en cuanto a la existencia de estándares sobre la debida diligencia. A modo de ejemplo, el participante mencionó como las empresas de cualquier tamaño podrían empezar a apropiarse más de los procesos para identificar, prevenir, mitigar y abordar todos los impactos adversos que pudieran llegar a causar en el marco de sus operaciones y a las demás partes, como sindicatos, sociedad civil, la academia, para poder acompañar de mejor manera y monitorear la incorporación de los procesos.

Finalizó expresando que todos estos diálogos son vitales para poder disparar las conversaciones, y que desde OCDE se estará muy atento a seguir acompañando estas iniciativas.

Sofía Ruete, integrante de la Secretaría Ejecutiva del Punto Nacional de Contacto de OCDE del Ministerio de Economía y Finanzas, inició su presentación planteando que Uruguay se convirtió este año (2021) en el miembro número 50 de la Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales y es miembro asociado de OCDE, lo que se entiende que es un paso más en el camino a fortalecer estas iniciativas que estamos conversando.

Continuó planteando que su aporte al Diálogo será brindar una visión de la instrumentación que está haciendo Uruguay desde el Ministerio de Economía y Finanzas para trabajar en ese sentido



Sofía Ruete, integrante de la Secretaría Ejecutiva del Punto Nacional de Contacto de OCDE del Ministerio de Economía y Finanzas

Afirmó que la conducta empresarial responsable significa integrar y considerar todos los temas ambientales y sociales dentro de lo que son las actividades comerciales, siendo su promoción y su aplicación claves para generar un entorno empresarial saludable, porque atrae las inversiones de alta calidad y minimiza los riesgos a las empresas, garantizando los derechos de ambas partes, lo que conduce a la creación de valor.

Dentro de los instrumentos de la OCDE, afirmó que las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son recomendaciones que respaldan a nivel internacional los gobiernos

sobre lo que implica la conducta empresarial responsable. En las mismas se definen conductas desde el punto de vista social y medioambiental y también se describen procedimientos para la resolución de conflictos que puedan darse entre las empresas y las comunidades o los individuos que puedan verse afectados negativamente por las actividades empresariales.

Continuó planteando que se hace patente de esta manera el impacto que tienen las empresas prácticamente en todo el espectro de los derechos humanos y, por lo tanto, es fundamental asegurar los mecanismos para que esas obligaciones se cumplan.

Tanto los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, como las Convenciones Fundamentales de la OIT constituyen ese marco en el que se va a trabajar desde el Punto Nacional de Contacto y como miembro ahora de la OCDE, afirmó Ruete. Se trata de un marco útil para promover ese diálogo constructivo entre gobiernos, empresas, sindicatos, sociedad civil, para buscar entendimientos comunes sobre lo que constituye, en definitiva, la conducta empresarial responsable y su actividad acorde.

"Se hace patente el impacto de las empresas en prácticamente todo el espectro de los derechos humanos y entonces es fundamental asegurar los mecanismos para que esas obligaciones se cumplan"

Sofía Ruete

Prosiguió planteando que los Puntos Nacionales de Contacto, que en este caso ha sido designado dentro del MEF en la Asesoría Político Comercial, son agencias que establecen los gobiernos y tienen un doble mandato: promover las Directrices de la OCDE, pero también tratar casos en los cuales, a raíz de instancias específicas, se establecen mecanismos de diálogo y de solución de dificultades en la temática. Uruguay lo ha instrumentado través un decreto de Presidencia que es el 65 del 2021.⁽⁵⁾

Finalizó su participación presentando las próximas actividades de promoción y lanzamiento que se realizarán en el país, así como la disponibilidad de la página web destinada al tema. Afirmó que desde el MEF se está trabajando actualmente en la reglamentación de los mecanismos para el abordaje de instancias específicas de actuación del

5 - Disponible en Internet: <https://www.impo.com.uy/bases/decretos/65-2021>

Punto de Contacto Nacional de OCDE, afirmando que el énfasis estará puesto en derechos humanos, género y medio ambiente, como temas de especial importancia para Uruguay. Concluyó invitando a que los participantes puedan acompañar este proceso, afirmando que se generarán instancias futuras de trabajo en conjunto, para instrumentar otros mecanismos de diálogo, en tanto es la mejor manera de alcanzar estos fines.



PACTO GLOBAL

Virginia Suárez, integrante de la OCR de Naciones Unidas en Uruguay, quien se encuentra coordinando la reinstalación del Pacto Global en Uruguay, participó del Diálogo brindando una visión del Pacto y de este proceso en el país.

La iniciativa voluntaria de sostenibilidad corporativa en el mundo que reúne alrededor de 10 mil empresas, 3.000 organizaciones no empresariales, y que está en 160 países se denomina la red de Pacto Global. Es una red específicamente de empresas como grandes promotoras en la contribución al desarrollo sostenible de los países, afirmó Suárez.

Continuó su presentación explicando que se está relanzando a nivel local el Pacto Global en Uruguay, ya que, si bien existió previamente, se le está dando un nuevo enfoque en la actualidad. Lo definió como un espacio de anclaje del sector empresarial de manera de poder contribuir

y colaborar facilitando la aceleración de empresas en la conquista de los objetivos comprometidos en la Agenda 2030.

El Pacto Global se enclava en diez principios de grandes categorías, de normas de derechos humanos, normas laborales, de medio ambiente y de anticorrupción y también fundamentado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas correspondientes, de acuerdo con lo plantado por la participante.



Virginia Suárez, integrante de la OCR de Naciones Unidas en Uruguay

Continuó afirmando que la conexión es directa entre los ODS y la transversalización en estos ODS de los derechos humanos y que desde el texto de la agenda se tienen indicadores específicos para adentrar a las empresas a estos indicadores.

Los principios del Pacto son para apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados internacionalmente, pero también asegurando a las empresas de no convertirse en los cómplices de abuso de los DDHH y como trabajar en ello. Naciones Unidas forma parte de esta red de empresas, en tanto su rol es salvaguardar este tipo de principios y desde allí trabaja.

Prosiguió anunciando que se estima que a mediados del presente año se estará relanzando el Pacto Global en Uruguay, destacando que esta iniciativa está alineada 100% con el marco de cooperación de Naciones

Unidas cuyo programa de trabajo se ha consensuado con el gobierno para los próximos cuatro años. En el mismo se presentan pilares, objetivos y efectos concretos en temas de derechos humanos para adentrar a las empresas en la contribución y elaboración de estos planes.

Desde Pacto Global se quiere fomentar la generación de espacios de diálogo donde organizaciones públicas, privadas, la sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas puedan dar enfoque y operativizar las temáticas de derechos humanos directamente con las empresas. Adicionalmente, se desarrolla un trabajo interagencial en la interna de las Naciones Unidas, poniendo a todo el sistema a trabajar en el tema de empresas y derechos humanos.

Destacó que se ha entrado en contacto con Pactos Globales Regionales y otras organizaciones que ya trabajando en estas temáticas en el país y realizó una invitación a las organizaciones presentes a un conversatorio sobre Empresas y Derechos Humanos. Este espacio, agregó, tendría el objetivo de generar en forma conjunta insumos para contribuir al Plan Nacional de Derechos Humanos, con el objetivo de que el mismo pueda realizarse en forma interactiva y multidisciplinaria.



Este tipo de diálogos en derechos humanos son los que desde Pacto Global se quieren fomentar como espacios de co-creación y con un enfoque sistémico a estas temáticas de gran valor, afirmó en el cierre de su presentación.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA CUESTIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y OTRAS EMPRESAS

María García, Oficial de Derechos Humanos del Secretariado del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras empresas de las Naciones Unidas, con base en Ginebra, participó del Diálogo mediante un mensaje en video.



María García, Oficial de Derechos Humanos del Secretariado del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras empresas de las Naciones Unidas.

En su mensaje proporcionó información acerca de las diferentes actividades del Grupo de Trabajo durante el último año, sobre los informes que se presentarán al Consejo de Derechos Humanos en Junio de 2021 y sobre los diferentes foros que se han organizado o se realizarán durante el presente año.

Brindó información sobre el proyecto en el que se está trabajando con motivo del décimo aniversario de los Principios Rectores para Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este marco, el Grupo de Trabajo ha realizado consultas en diferentes regiones y con diferentes grupos de interés para realizar un análisis de los avances obtenidos en los últimos diez años, así como también obtener una mirada de los próximos diez años, y elaborar una serie de informes que serán presentados al Consejo de Derechos Humanos, afirmó García.

Agregó que el Grupo de Trabajo presentará un informe adicional acerca de los defensores y las defensoras de derechos humanos, en el que se está elaborando unas directrices para las empresas en cuanto a la participación, el respeto y el apoyo a las defensoras y defensores de derechos humanos y en la preservación del espacio cívico en consonancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas para empresas y derechos humanos.

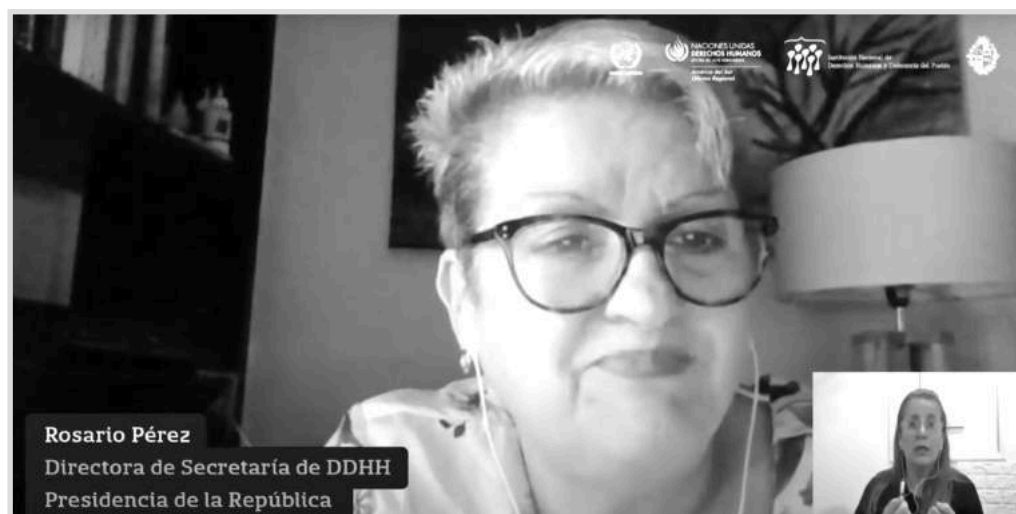
Informó a continuación, que se presentará un segundo anexo a este informe, relacionado con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Este documento, proviene de una serie de consultas que el Grupo de Trabajo mantuvo, tanto en Ginebra como en diferentes regiones del mundo en los pasados años, analizando el rol de estas Instituciones.

Agregó que el Grupo de Trabajo realizará una serie de consultas, de las cuales ya se han efectuado tres sobre los Acuerdos Internacionales de Inversión y su relación con los derechos humanos, con el objetivo de elaborar el informe que será presentado en setiembre del presente año a la Asamblea General

Finalizó su exposición haciendo referencia a los foros que el Grupo de Trabajo ha organizado junto a la UNDP y la OIT, entre ellos se cuentan el foro regional para Sud-Asia realizado de manera virtual en marzo de 2021, y los foros regionales para Asia, Naciones del Pacífico, y América Latina y el Caribe, que serán desarrollados en junio, diciembre y octubre de 2021 respectivamente. Sobre este último, agrega que se está organizando junto con la Oficina del Alto Comisionado, en el marco del proyecto CERALC. Con motivo del décimo aniversario informó que realizará el foro anual, tradicionalmente celebrado en Ginebra, pero que debido a la situación de pandemia se realizará de manera virtual en el presente año.

3.4. PERSPECTIVA DEL TRABAJO SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Rosario Pérez, Secretaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, planteó en el inicio de su exposición que el tema Empresas y Derechos Humanos, es un tema que preocupa a dicha organización y en el cual se encuentran trabajando. Planteó que en el año 2016 dicha Secretaría desarrolló un proyecto de cooperación con el Instituto Danés de Derechos Humanos, llegándose a realizar una guía de trabajo en el tema, pero que finalmente no logró concretarse. A partir de allí, agregó, se ha avanzado a nivel privado en prácticas de responsabilidad social empresarial.



Rosario Pérez, Secretaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República durante su exposición.

Planteó que Australia fue el primer país en desarrollar un plan nacional de derechos humanos en 1994, y que luego al menos 41 países lo han hecho, incluyendo 10 países latinoamericanos, siendo la región destacada en este aspecto.

En este contexto, Uruguay aún no cuenta con un plan nacional, agregando que esto implica un conjunto de acciones donde se establecen objetivos, metas, instituciones responsables, recursos financieros, y una presentación de medidas sobre los principales problemas y desafíos en el país, donde se tienen en cuenta las

recomendaciones internacionales que se han hecho al Estado en materia de derechos humanos.

"Nos encontramos en la Secretaría inmersos en la construcción de un primer Plan Nacional de acción en Derechos Humanos y, dentro de este marco, es nuestra aspiración poder realizarlo en conjunto con otros sinnúmero de planes que se vienen desarrollando y trabajando a nivel nacional. Para desarrollar el Plan Nacional de derechos humanos es fundamental en este momento lograr algunas apoyaturas, tanto en el plano técnico como en lo económico, para poder de realizarlo en forma efectiva"

Rosario Pérez, Secretaría DDHH de Presidencia

Este plan es sumamente necesario frente al universo postpandemia, donde temas como el teletrabajo también necesitan ser regulados, así como la preservación de los derechos de los trabajadores ante la automatización, entre otros, afirmó.

Uruguay está participando oficialmente desde febrero con la OCDE, pero ya desde diciembre de 2020 forma parte de la comunidad de práctica intergubernamental sobre Empresas y Derechos Humanos, que esta organización realiza. Esta comunidad cuenta con amplia cooperación entre actores gubernamentales clave en América Latina y el Caribe y fortalece el interés de la región por las empresas y los derechos humanos, como parte de una conducta empresarial responsable, afirmó la panelista.

Agregó que a la fecha varios países de la región se encuentran en un proceso de preparación, revisión e implementación de planes de acción nacionales en el campo las empresas y los derechos humanos. Es con base en esta experiencia que los gobiernos participantes y otros países de la región acordaron establecer una comunidad de práctica como plataforma de aprendizaje mutuo. El objetivo de esta comunidad es servir como plataforma para el intercambio regular de experiencias, mejores prácticas y desafíos entre los gobiernos regionales en el área, generándose aprendizaje a través del intercambio de información, estrategias, estudios, materiales.

En este contexto planteó Pérez, se está analizando cómo complementar y fortalecer las redes en la región, identificándose que aún falta un aspecto básico que es poder construir acuerdos necesarios para que en una próxima instancia se pueda lanzar, junto con el plan nacional de acción en derechos humanos, un plan de acción nacional en derechos humanos y empresas.

Finalizó su exposición reiterando que actualmente se está trabajando en el tema, basándose en los principios rectores y con un enfoque preventivo, pero no se cuenta aún con los recursos ni el tiempo para abordar la temática en la forma en que quisieran.

La Diputada Lilián Galán, integrante del Parlamento del Uruguay, planteó en su exposición que la globalización ha favorecido la expansión rápida de la pandemia de COVID 19, brindando la oportunidad para identificar la relevancia de legislar a nivel internacional. En esta línea, hizo mención al Tratado vinculante que se abordó previamente en el Diálogo, afirmando que el mismo es necesario, en tanto es crucial para los países legislar internacionalmente en estos temas, para poder dar cumplimiento a los derechos humanos.

Continuó su participación haciendo mención a las empresas transnacionales de vacunas farmacológicas, que constituyen un gran poder organizado, especialmente en los momentos actuales, a partir de la pandemia. Jerarquizó la necesidad del control de las empresas transnacionales por medio de un Tratado internacional, lo que reforzaría la democracia y la soberanía de los Estados, afirmó. Agregó que esto es necesario en tanto son los Estados los garantes del cumplimiento de los derechos humanos, afirmando que, si las violaciones a los derechos humanos son internacionales, las soluciones deben ser aportadas por parte del derecho internacional.

"El control de las empresas transnacionales por medio de un tratado internacional refuerza la democracia y la soberanía de los Estados. Son los estados los garantes del cumplimiento de los derechos humanos y por eso nos parece sumamente importante mencionar que si la violación de los derechos humanos es internacional también las soluciones deben ser por parte del derecho internacional"

Lilián Galán

En esta línea, prosiguió preguntando qué soluciones se tomarán desde el gobierno del país, incluyendo los tres poderes del Estado, haciendo mención especial al Poder Legislativo como representación de la democracia más plena y como se dará respuesta desde el movimiento sindical, y las organizaciones sociales para crear ámbitos de diálogo y de pacto, como ya se mencionó en este encuentro.



Lilián Galán

Diputada, Parlamento de la República Oriental del Uruguay

Lilián Galán, Diputada, Parlamento del Uruguay

Agregó que estos espacios de pacto no son nuevos para nuestro país, en tanto se ha participado desde el Parlamento previamente en espacios de trabajo en Ginebra, acompañando al Poder Legislativo y a Cancillería. Afirmó la relevancia de contar con espacios de a nivel del gobierno, interministeriales, acompañados por las organizaciones sindicales y sociales, en tanto considera muy importante que estos tratados internacionales tengan una consolidación fuerte en los países para mejor cumplimiento de los derechos humanos.

Finalizó su participación expresando su deseo de que este evento sea un ámbito de inauguración de un diálogo fructífero en el país, que conduzca al mejor cumplimiento de los derechos humanos y de las reglamentaciones del derecho internacional.

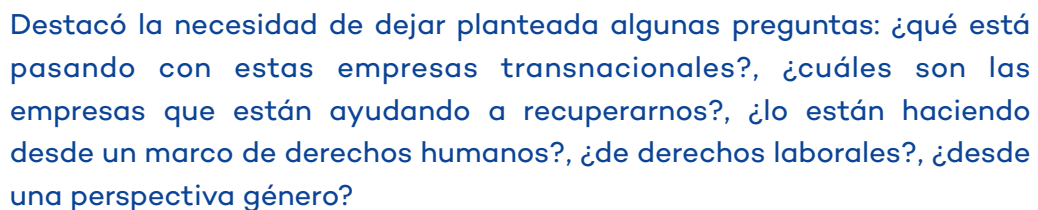
LA PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL MOVIMIENTO SINDICAL A NIVEL NACIONAL

Fernanda Aguirre, Responsable de Derechos Humanos del PIT-CNT, recordó que un elemento de análisis importante a la hora de pensar en empresas y derechos humanos es el rol que las empresas tuvieron en apoyo a la dictadura cívico militar en el país, en la cual se violaron los derechos humanos. Destacó en este sentido la importancia de las empresas en lo que refiere al respecto y promoción de dichos derechos. Prosiguió su exposición incluyendo algunos elementos de análisis acerca derechos humanos y empresas en el contexto de la pandemia, destacando la relevancia de la construcción de reglas y lineamientos claros para la actividad empresarial en lo que refiere al cumplimiento de los derechos humanos, enfatizando que es tan importante como su elaboración el garantizar su aplicación efectiva. Agregó que todas las construcciones legislativas, acuerdos, pactos e instancias de trabajo que se han mencionado durante el diálogo son fundamentales y necesarias en la medida en que se garantice su cumplimiento.



Alejandra Scampini, Asesora Senior de Políticas de Poder Latam, indicó que el tema del Diálogo no resulta nuevo y que debe de estar en el tapete político porque también afecta a comunidades y requiere de un trabajo constante y a largo plazo. Mencionó un caso paradigmático en México en el 2014 que afectó a comunidades y ocho años después se

Agregó que hablar hoy de Empresas y Derechos Humanos, es hablar también de los Estados, de garantizar los servicios públicos de educación, salud, vivienda, acceso a internet, acceso a vacunas, etc.



Destacó las políticas públicas que han puesto a Uruguay a la vanguardia, como el matrimonio igualitario, la liberalización del cannabis y la voz líder que ha tenido Uruguay en el tratado vinculante. En este sentido, agregó que se plantea la oportunidad de seguir defendiendo las empresas estatales que son las que hoy están garantizando el acceso a los servicios básicos (agua, luz, internet, etc.)

Finalizó su intervención señalando la relevancia de que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya manifestado la intención de retomar el tratado vinculante ya que existe un acumulado de más de 4 años de trabajo. Manifestó el interés de la sociedad civil de ser invitados a participar en el Plan Nacional de Derechos Humanos, y la importancia de ampliar esta participación e incluir a diversos sectores en el marco trabajar para salir de la presente crisis social y económica y “no hacer

daño". En esta línea, afirmó que sería un error no tener en cuenta a la sociedad civil.

"Hay una gran diversidad de organizaciones en la sociedad uruguaya que tiene mucho para decir y si estamos hablando de incluir a todos y de no hacer daño, no llamar a la sociedad civil a la elaboración de estos planes (Plan Nacional de DDHH) tan centrales para salir adelante económicamente, socialmente, y salir de esta crisis, sería un error"

Alejandra Scampini, Poder UY

Alberto Villareal, integrante de la organización Redes-Amigos de la Tierra, destacó , en relación con las iniciativas globales para desarrollar estándares compartidos entre los Estados, para promover la conducta empresarial responsable con el enfoque de derechos humanos, el proceso de negociación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas respecto a los derechos humanos.

Reconoció el valor de la ley blanda y las directrices voluntarias que se han desarrollado en el Pacto Global, los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH, la OCDE y la OIT, Pero manifestó que si esos estándares de adhesión voluntaria no se refuerzan sustantivamente y se cristalizan en normas de obligado cumplimiento, las violaciones de derechos humanos que involucran a las empresas transnacionales y a las empresas en las cadenas de producción que ellas controlan, permanecerán impunes en la gran mayoría de los casos.

Aludió a la crisis de hambre, cambio climático y pérdida de diversidad, en interrelación con la pandemia del COVID-19, que afectan los derechos humanos y la vida misma en el planeta, así como a la gran responsabilidad de las empresas transnacionales y sus cadenas de producción en estas crisis globales.

Asimismo, manifestó el debilitamiento de la gobernabilidad democrática en todo el mundo en la medida que los gobiernos, empezando por las potencias de occidente, ceden espacios de poder, otorgando privilegios al sector privado. Como ejemplo, mencionó los acuerdos internacionales de libre comercio y contratos de inversión, y se refirió al acuerdo de UPM y Uruguay, que fue denunciado por organizaciones finlandesas

ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.



Alberto Villareal, integrante de la organización Redes-Amigos de la Tierra.

Manifestó la necesidad de regular a las grandes plataformas digitales que se han enriquecido durante la pandemia y que están ejerciendo presión en la Organización del Comercio (OMC) para que no se las regule en su actividad y ganancias, mientras que los Estados y la sociedad misma queda sin resguardo.

Destacó que Redes Amigos de la Tierra, como parte de la sociedad civil, ha participado en el proceso de negociación de la propuesta de Tratado vinculante desde 2014 y a partir de este trabajo tienen su propuesta, la cual puso a disposición⁶.

Finalizó su intervención requiriendo mayor apoyo de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas al proceso del Tratado

⁶ - Disponible en Internet: https://www.stopcorporateimpunity.org/wp-content/uploads/2017/11/Tratdo-ES_-FINAL.pdf.

Vinculante y en particular a las consultas regionales en el marco del proceso de negociación.

EL ROL DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

En representación del **Instituto Danés de Derechos Humanos**, y brindando una perspectiva sobre el rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, participó **Álvaro Amaya, Experto Regional para América Latina**.

Amaya presentó al Instituto Danés de Derechos Humanos, el cual cuenta con un trabajo internacional en materia de empresas y derechos humanos, entre otros temas. Recogió lo mencionado por la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia sobre el trabajo realizado en conjunto en el pasado, expresando su deseo de poder continuarlo en el futuro próximo.

Continuó abordando el rol que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos tienen en los temas de empresas y derechos humanos, específicamente como mecanismo no judicial de carácter estatal en materia de reparación. En esta línea, el Instituto Danés recientemente ha emitido un informe en el cual han encontrado que las Instituciones Nacionales de DDHH cuentan con un mandato que les permite habilitar sus funciones en relación con actores privados y en relaciones con empresas.

Afirmó que cada Institución tiene diferentes contextos y limitaciones, no sólo en sus mandatos sino también en materia financiera, agregando que es muy importante precisamente reforzar y apoyar el trabajo de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en materia de empresas y derechos humanos.

Continuó presentando seis formas en las cuales las INDDHH pueden promover este rol de mecanismo no judicial de reparación:

- Tramitando las denuncias y reclamaciones que presente la ciudadanía ante la INDDHH.
- Siendo partícipe en la solución de controversias a través de métodos alternativos, mediante el diálogo o la intermediación en conflictos.

- Haciendo seguimiento al cumplimiento de las reparaciones que puedan dictar los órganos judiciales, tanto a nivel nacional como internacional.
- Llevando a cabo investigaciones sobre circunstancias específicas en materia de empresas y derechos humanos.
- Generando espacios de articulación en el ámbito público, con diferentes actores públicos y privados, incluidos actores empresariales.
- Realizando la facilitación directa para el acceso a reparación, asesorando a los actores para que puedan acceder a mecanismos judiciales.



Álvaro Amaya, Experto Regional para América Latina
del Instituto Danés de Derechos Humanos.

En el cierre de su presentación, destacó la necesaria colaboración con otros mecanismos no judiciales, enfatizando la relevancia de que el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Uruguay pueda también vincularse y tener una conversación permanente con la INDDHH, con el fin de nutrir de manera colaborativa su trabajo.

Agregó que, el Instituto Danés iniciará próximamente un proyecto, centrado principalmente en Colombia y Perú, pero ampliado a la región a futuro, para promover el diálogo entre los diversos mecanismos en la

región. Asimismo, informó que el Instituto ha decidido reforzar su presencia regional con un Centro Regional para América Latina y El Caribe con sede en la ciudad de Bogotá, para continuar apoyando a la región en los temas abordados en este diálogo, entre otros.

4. Cierre

4. CIERRE

En el cierre del Diálogo los y las panelistas realizaron su reflexión final sobre la temática. Un eje común de las diferentes exposiciones al cierre y que sistematizó el espíritu de diálogo que todos los y las participantes manifestaron, fue la jerarquización de los espacios de intercambio y construcción conjunta entre todos los actores, tanto gubernamentales, como privados, del sector sindical, la academia y las organizaciones de sociedad civil.

En forma unánime los y las expositores manifestaron su interés en participar de los diferentes espacios y la necesidad de continuar aportando desde su rol específico al desarrollo de Plan Nacional de Derechos Humanos y a la participación del país en los espacios de diálogo y construcción de los Tratados internacionales referentes a empresas y derechos humanos.

Rosario Pérez, desde la Secretaría de DDHH de Presidencia, manifestó su interés en continuar en contacto con todas las organizaciones y personas participantes del diálogo, en el marco del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que esa Secretaría se ha planteado el objetivo de diseñar, elaborar, aprobar y publicar para el período 2021-2024. Esto parte de las recomendaciones de la Conferencia de Derechos Humanos de Viena del año 1993, Se plantea asimismo desarrollar e implementar planes operativos anuales para alcanzar objetivos parciales que contemplen los recursos necesarios para su ejecución.

En línea con lo anterior, planteó que se está desarrollando un sistema de indicadores de monitoreo y seguimiento de las actividades que deriven del Plan Nacional, el cual se encuentra actualmente elaborado a nivel de marco , pero que debe ser profundizado en contenido.

En este marco, se procurará planificar acciones descentralizadas para garantizar derechos, adecuadas a los territorios y en coordinación con los actores locales, afirmó.

Presentó en el cierre de su exposición los seis ejes de trabajo que tendrá el Plan Nacional, cada uno de los cuáles tiene objetivos, indicadores y metas específicos:

- Eje 1: No violencia y seguridad pública
- Eje 2: Inclusión y no discriminación e igualdad
- Eje 3: Acceso a los derechos de forma universal
- Eje 4: Compromiso con los derechos humanos
- Eje 5: Memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias
- Eje 6: Democracia y Derechos Humanos.

Con respecto al último eje, agregó que el mismo incluye todo lo referente a institucionalidad y normativa, democracia representativa y democracia deliberativa, participativa y sistema de justicia. Destacó que el Plan se desarrollará en seis etapas, y que actualmente se está implementando la primera, que es el proceso preparatorio. En forma posterior se iniciará el proceso participativo, y es en el mismo en que se prevé convocar a los diferentes actores presentes en el diálogo para desarrollar un trabajo conjunto.

Carlos López, integrante de la Comisión Internacional de Juristas, cerró su intervención en el diálogo destacando que el problema de la globalización y sus impactos en los derechos humanos es un problema complejo, que requiere un abordaje múltiple, una mezcla de diversas entradas y soluciones (o Smart Mix como se le conoce internacionalmente).

Reconoció que en las últimas décadas ha predominado un enfoque voluntario para abordar estas problemáticas, no un abordaje obligatorio, desde la ley, desde los derechos y con poca rendición de cuentas. Afirmó que, por lo tanto, es el momento de tomar las riendas y tratar de avanzar en este aspecto, agregando que actualmente existen numerosas iniciativas a nivel de la OIT y de otros espacios internacionales y regionales.

"En las últimas décadas lo que ha predominado es un enfoque voluntario y casi no hay nada que sea obligatorio, no hay ley, hay poca rendición de cuentas, entonces creo que es el momento de tomar las riendas y tratar de avanzar en este sentido".

Carlos López

Finalizó demostrando su entusiasmo por los anuncios realizados desde la Cancillería con relación al proceso de discusión que se estará realizando para abordar la posición de Uruguay sobre el Tratado Internacional, apreciando asimismo la vitalidad y constancia de las organizaciones de sociedad civil en el país y la región.

Marina Sande, desde la Cancillería, manifestó lo enriquecedor del Diálogo y reiteró la necesidad de tener una posición país, entendiendo que se trata de un proceso evolutivo que debe asegurar un diálogo inclusivo, contemplando las diversas visiones que conviven sobre el tema.

Destacó la importancia de mantener reuniones interinstitucionales y con todos los sectores para consensuar una posición país que pueda llevarse a una negociación internacional, como es el caso del Tratado que se está comenzando a negociar en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Finalizó expresando su interés en lograr, si la situación de pandemia lo permite, una reunión de estas características en forma previa a la próxima sesión del Grupo de Trabajo.

Wilder Tayler, presidente de la INDDHH, agradeció los aportes de todas las personas participantes, destacando la gran multiplicidad de facetas que el tema aportó y la cantidad de información que surgió en el Diálogo, puesta a disposición de los y las participantes.

Reflexionó acerca de que la relación entre empresas y derechos humanos aún es un tema que genera dudas en muchos espacios, por tratarse de un tema aún incipiente en el país. Afirmó que por esa razón este tipo de eventos resultan de gran valor agregado. Agregó que este desconocimiento actual es natural, dado que la temática aún no está instalada, como sí lo están otros temas de derechos humanos, valorando que se haya iniciado el debate, pero reconociendo que aún falta mucho por transitar.

La pandemia ha puesto en forma muy cruda en la opinión pública el tema de empresas y derechos humanos, afirmó Tayler, no solamente con relación a los derechos laborales, sino también el derecho a la salud y a la vida.

Agregó la importancia de continuar problematizando sobre estos temas, incorporando otros que pudieron haber quedado por fuera del Diálogo, pero son igualmente de interés, como el concepto de conducta empresarial responsable, en un contexto de pandemia, la necesidad de diálogo social en relación con lo empresarial, y específicamente la temática de las patentes de vacunas.

Enfatizó la relevancia de abordar la temática de la normativa vinculante y voluntaria, que se mencionara previamente, coincidiendo con lo expresado sobre el tema, agregando que es un tema central en el debate.

Finalizó su exposición planteando que cuando se trabaja en temas de derechos humanos es necesario pensar que existe o puede existir una víctima, que es en quién se produce el impacto de la norma débil, o no completa, o la inexistencia o la violación de la norma, por lo que esto debe estar en el centro de la preocupación.

Destacó el interés de la INDDHH en los anuncios realizados, vinculados a la reactivación del rol uruguayo sobre el tema, considerando que Uruguay tienen una tradición al respecto y su voz es respetada. En esta línea, realizó un llamado a proseguir en el tema y consolidar esta línea de trabajo, manifestando el interés y voluntad de la INDDH de aportar en este proceso.

Jan Jarab, Representante de ACNUDH para América del Sur, dio cierre al Diálogo, agradeciendo a las personas participantes, así como a la riqueza y calidad del debate que se generó y que sistematizó en tres grandes ejes:

- i. El abordaje nacional en el tema de empresas y derechos humanos
- ii. El abordaje internacional, con la negociación de un posible tratado vinculante.
- iii. El impacto de la pandemia y los desafíos que surgen en este contexto.

Afirmó que desde ACNUDH se tiene el objetivo de seguir trabajando y cooperando en los tres ejes.

Continuó reconociendo el impacto de la pandemia, la cual fue expresada claramente en las voces de las ONG y el movimiento sindical,

quienes enfatizaron el costo de la misma en los y las trabajadores, así como el hecho de que generó ganadores y perdedores en la sociedad. En esta línea, Jarab destacó la necesidad de proteger en este contexto el derecho a la vida, a la salud y los derechos laborales. Es importante, agregó, que en la recuperación económica no se favorezca una flexibilidad que fortalezca aún más la posición de los ganadores con relación a los perdedores de la pandemia.

Manifestó su entusiasmo frente a la discusión generada sobre el abordaje nacional e internacional del tema empresas y derechos humanos, reafirmando el compromiso de la Oficina Regional de ACNUDH en acompañar al país en su abordaje nacional de la temática y también en el proceso de negociación de un posible instrumento vinculante.

Finalizó su exposición destacando el rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, como socios indispensables de ACNUDH en el trabajo por los derechos humanos, y también como instituciones indispensables en un Estado de derecho del siglo XXI. Reconoció que por su carácter innovador en ocasiones puede no entenderse su rol, el cual es defender de manera imparcial e independiente los derechos humanos consagrados en las normas y estándares internacionales y nacionales. Este, remarcó, debe ser el denominador común de todos los actores en una sociedad democrática.

"Las instituciones autónomas de derechos humanos son para nuestra Oficina del Alto Comisionado los socios indispensables, pero también son las instituciones indispensables en un Estado de derecho del siglo 21. Por su carácter innovador a veces no se entiende su rol, que es de defender los derechos humanos consagrados en las normas y estándares internacionales y nacionales. Este debe de ser un denominador común de todos los actores de una sociedad democrática".

Jan Jarab

Felicitó en este espacio a la INDDHH, representada en su presidente y en el equipo de la misma, por la cooperación y el trabajo conjunto, tanto en el ciclo de diálogos que se finaliza, como en general. Destacó, que Instituciones Nacionales de Derechos Humanos son la encarnación de

un importante atributo de la cultura democrática. Animó, por lo tanto, a entender las críticas como un componente sano para que la sociedad pueda seguir mejorando.



Graciela Dede, Asesora de Derechos Humanos de la Oficina de la Coordinadora Residente, promotora y moderadora del ciclo en la despedida a los participantes.

Cerró su intervención reforzando su intención de seguir cooperando y trabajando en conjunto con la INDDHH, así como el compromiso de ACNUDH para ello.

5. Anexos

LISTADO DE PANELISTAS Y PARTICIPANTES

PANELISTAS

Soledad García Muñoz	Relatora Especial DESCA, CIDH
Wilder Tayler	Presidente de la INDDHH
Jan Jarab	Representante para América del Sur de ACNUDH
Rosario Perez	Directora de Secretaría de DDHH, Presidencia de la República
Marina Sande	Directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Ministerio de Relaciones Exteriores
Carlos López	Asesor Jurídico Senior, Empresas y Derechos Humanos, Comisión Internacional de Juristas

PARTICIPANTES

María García	Integrante de la Secretaría del Grupo de Trabajo, Naciones Unidas
Nicolás Torres	Coordinador Nacional proyecto CERALC, OIT
Germán Zarama	Analista de políticas y punto focal regional para América Latina y el Caribe, OCDE
Sofía Ruete	Integrante de la Secretaría Ejecutiva del Punto Nacional de Contacto de la OCDE, Ministerio de Economía y Finanzas
Virginia Suarez	Integrante de la OCR, Naciones Unidas Uruguay
Fernanda Aguirre	Responsable de DDHH del PIT CNT
Lilian Galan	Diputada, Parlamento del Uruguay
Alejandra Scampini	Asesor Senior de Políticas en Poder UY
Alberto Villarreal	Integrante de REDES – Amigos de la Tierra
Álvaro Amaya	Experto Regional para América Latina, Danish Institute for Human Rights

EMPRESAS Y Derechos Humanos

4º Diálogo

CICLO DE DIÁLOGOS
EN LA INDDHH
Derechos humanos
en tiempos de pandemia



28 DE ABRIL, 2021 | ACNUDH, OIT, OCDE, Instituto Danés de DDHH, CERALC- OIT, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Parlamento del Uruguay, Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Comisión Internacional de Juristas, Pacto Global, DESCA- CIDH, PIT- CNT, Redes Amigos de la Tierra, Poder Latam y otros.

Documentación gráfica: Laura Báez | Para @La_cartográfica



NACIONES UNIDAS
DERECHOS HUMANOS
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO
América del Sur
Oficina Regional



Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo





gub.uy/inddhh